



Resolución de Superintendencia

N° 495 -2018-SUCAMEC

Lima, 25. ABR 2018

VISTOS: El Informe N° 00087-2018-SUCAMEC-GAMAC, de fecha 26 de enero de 2018, de la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos; el Informe Legal N° 00261-2018-SUCAMEC-OGAJ, de fecha 17 de abril de 2018, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1127, se creó la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, como Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio del Interior, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía administrativa, funcional y económica en sus funciones;

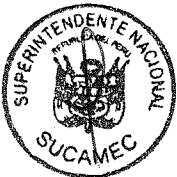
Que, el artículo 6 del referido cuerpo legal, establece como funciones de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (en adelante, SUCAMEC), entre otras, el control, administración, supervisión, fiscalización, regulación normativa y sanción en el ámbito de las armas de fuego y municiones de uso civil, de conformidad con la Constitución, los tratados internacionales y la legislación vigente;

Que, es facultad de las entidades de la Administración Pública, revisar sus propios actos, en virtud del control administrativo, el mismo que encuentra fundamento en la potestad de Autotutela Administrativa, por el cual la entidad puede declarar la nulidad de sus propias actuaciones, básicamente cuando dichos actos resultan afectados por vicios de legalidad, que a su vez vulneran el ordenamiento jurídico;

Que, mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, ordenando y sistematizando el principal instrumento normativo que contiene las reglas reguladoras de la conducta del Estado frente a los administrados, como es la Ley N° 27444, en concordancia con su modificatoria contenida en el Decreto Legislativo N° 1272;

Que, la nulidad puede ser planteada por los administrados a través de los recursos administrativos que les confiere la Ley o ser declarada de oficio por la autoridad administrativa. En este último caso, de conformidad con el numeral 11.2 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, será conocida y declarada por la autoridad superior de quien declaró el acto, salvo que se trate de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica;

Que, el artículo 211 del citado texto legal, reconoce la nulidad de oficio de los actos administrativos, estableciendo para su aplicación, las siguientes condiciones: 211.1) Puede declararse de oficio la nulidad, en cualquiera de los casos enumerados en su artículo 10, aun cuando hayan quedado firmes y siempre que agraven el interés público; 211.2) Sólo puede ser declarada de oficio por el superior jerárquico al que expidió el acto que se invalida, salvo que no estuviera sometido a subordinación, en cuyo caso será declarada por el mismo funcionario; y, 211.3) La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe en el plazo de dos (2) años, contado a partir de que hayan quedado consentidos;



J. DULANTO



V/B°
E. Paz



V/B°
C. Verástegui

Que, conforme prevé el inciso d) del numeral 226.2 del artículo 226 del citado texto legal, el acto que declara de oficio la nulidad en los casos a que se refiere el artículo 211 de esta Ley, agota la vía administrativa;

Que, con fecha 20 de diciembre de 2017, la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos al evaluar la solicitud sobre Transferencia del arma de fuego con serie N° 18838116 y emisión de Tarjeta de Propiedad, presentada por el señor José Noguera Labra, efectuó la consulta al Módulo de Solicitudes de Información de Antecedentes Penales – MSIAP del Poder Judicial, respecto si el señor Oscar Víctor Paliza Arellano (en su calidad de vendedor del arma de fuego con serie N° 18838116, según Contrato Privado de Transferencia de Arma de Fuego del 19 de diciembre de 2017) registra antecedentes penales históricos. En este contexto, la Jefa del Registro Nacional Judicial, a través del Oficio N° 2884-2018-B-WEB-RNC-GSJR-GG de fecha 08 de enero de 2018, detalló que el señor Oscar Víctor Paliza Arellano cuenta con registro de Antecedentes Penales Históricos por delito doloso, conforme al siguiente cuadro:

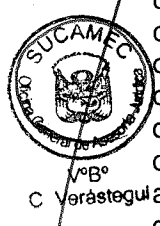
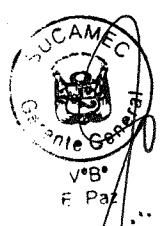
N°	ADMINISTRADO	ORGANO JURISDICCIONAL	EXPEDIENTE N°	FECHA SENTENCIA	DELITO
01	PALIZA ARELLANO OSCAR VICTOR	25° JUZGADO PENAL DE LIMA	614-03	17/11/2005	USURPACION DE FUNCION PUBLICA (ART. 361) FALSIFICACION DE DOCUMENTOS (ART. 427)

Que, luego de procesar la información enviada por la Jefa del Registro Nacional de Condenas de la Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación del Poder Judicial, la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos remitió a la Superintendencia Nacional de la SUCAMEC, el Informe N° 00087-2018-SUCAMEC-GAMAC de fecha 26 de enero de 2018, el cual concluye en señalar que se han advertido causales de nulidad en el acto administrativo contenido en la Licencia de uso de arma de fuego N° 7007584, previamente emitida en favor del señor Oscar Víctor Paliza Arellano, al acreditarse que no reúne lo exigido en el literal b), artículo 7, de la Ley N° 30299 y en el numeral 7.1, artículo 7 del Reglamento de la Ley N° 30299. En este sentido, recomienda declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos materializados en la Licencia de uso N° 7007584 y en las Tarjetas de Propiedad de las armas de fuego con números de serie 18838116, E15439Y, A482787, SD4433, 4886561 y E6364543. A su vez, sugiere que se informe a la Secretaria Técnica de los Procedimientos Disciplinarios de la SUCAMEC, a efectos de que deslinde responsabilidades;

Que, el artículo 9, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, consagra de manera expresa en nuestro ordenamiento administrativo, la presunción de validez de los actos administrativos, conforme al cual todo acto se considera válido, en tanto que su nulidad, no sea expresamente declarada en sede administrativa mediante los mecanismos que la ley establece;

Que, según el artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, son vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1) La contravención a la Constitución, a las Leyes o a las normas reglamentarias; 2) El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere su artículo 14; 3) Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición; y, 4) Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma;

Que, de acuerdo con el principio de Privilegio de Controles Posteriores contenido en el numeral 1.16, Artículo IV, Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444,





Resolución de Superintendencia

la Administración tiene la facultad de revisar sus propios actos administrativos en virtud del control posterior, a fin de evidenciar su Legalidad y de ser el caso dejarlos sin efecto, siempre y cuando se verifique que dichos actos resultaron alterados por vicio alguno en sus elementos conformantes, y coexistan vulnerando el orden jurídico, atentando contra derechos colectivos (contrarios al interés público) o derechos susceptibles de ser individualizados (derechos subjetivos de los administrados);

Que, por el principio de Impulso de Oficio consignado en el numeral 1.3 del referido artículo, las autoridades administrativas deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento, ordenando la realización de los actos que resulten convenientes para la aclaración de las cuestiones involucradas, aun cuando se trate de procedimientos iniciados por el administrado o por la entidad;

Que, el numeral 211.1 del artículo 211 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, prescribe que en cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10, puede declararse la nulidad de oficio de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agraven el interés público;

Que, en atención al procedimiento de nulidad de oficio establecido en el artículo 211 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, la Oficina General de Asesoría Jurídica corrió traslado al señor Oscar Víctor Paliza Arellano respecto del proceso de declaración de nulidad de oficio de los actos administrativos materializados en la Licencia de uso N° 7007584 y en las Tarjetas de Propiedad de las armas de fuego con números de serie 18838116, E15439Y, A482787, SD4433, 4886561 y E6364543, anteriormente emitidas a su favor, otorgándole el plazo de cinco (05) días hábiles para que ejerza su derecho de defensa, conforme se colige del Oficio N° 00116-2018-SUCAMEC-OGAJ de fecha 30 de enero de 2018, el cual ha sido debidamente notificado;

Que, a través del escrito S/N de fecha 12 de febrero de 2018, el señor Oscar Víctor Paliza Arellano en forma preliminar, señala que si bien es cierto la nulidad es una facultad de la Administración, no es menos cierto que toda Autoridad Administrativa debe actuar con respeto a la Constitución, con las garantías de una decisión motivada y fundada en derecho y que toda restricción debe adaptarse dentro de los límites de las facultades atribuidas, manteniendo la debida proporción y actuando sin discriminación alguna. En ese sentido, cuestiona la decisión de la SUCAMEC, toda vez que aduce que el acto administrativo (Informe N° 00087-2018-SUCAMEC-GAMAC) adolece de fundamentos y colisiona flagrantemente con la Constitución, ya que no se justifica, y que el mismo carece de la garantía de una debida motivación y congruencia, porque jamás en los anales judiciales y administrativos de un Estado de Derecho, donde se respetan los derechos fundamentales de las personas, un Reglamento puede prevalecer sobre la Constitución, peor aún si su artículo 51, refiere que *"la Constitución prevalece sobre toda norma legal"*, es decir existe supremacía constitucional, y, estando que la Constitución prohíbe revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada, entonces no se entiende como ahora la SUCAMEC puede servirse del Reglamento vigente, para pretender revivir un hecho inmovible del año 2005 y que tiene efecto de cosa juzgada, lo cual difiere de lo establecido en el artículo 103 de nuestra Constitución, referente a que no se puede aplicar una norma retroactivamente. Por lo que, pide dejar sin efecto la recomendación de causal de nulidad, por carecer de asidero constitucional;

Que, a su vez, el día 20 de febrero de 2018, señor Oscar Víctor Paliza Arellano presentó un escrito adicional S/N a esta Superintendencia Nacional, a través del cual solicita aclaración de "interpretación auténtica" respecto de lo acotado en el Informe N° 00087-2018-SUCAMEC-GAMAC, específicamente en cuanto: i) Al artículo de la Constitución que dispone



J. DULANTO



E. Paz



C. Verástegui

“Revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada”, al resurgir una cosa juzgada; ii) Al artículo de la acotada norma, que dispone que el Reglamento de la Ley N° 30299, “tiene efecto y fuerza retroactiva, para casos administrativos como el presente”, en la que su especialista legal se basa para pretender declarar la nulidad de mis documentos; y, iii) Al artículo de la Constitución que dispone “que el Reglamento de la Ley N° 30299 prevalece sobre la Constitución”. Asimismo, solicita se le otorgue copias fedateadas de los artículos de la Constitución, sobre los cuales se ampara la SUCAMEC para revivir procesos fenecidos y darle fuerza retroactiva al Reglamento de la Ley N° 30299;

Que, en relación al descargo presentado por el señor Oscar Víctor Paliza Arellano, a través de los escritos de fechas 12 y 20 de febrero del presente año, conviene precisar que los argumentos esgrimidos en dichos descargos no han podido desvirtuar la causal de nulidad descrita en el Informe N° 00087-2018-SUCAMEC-GAMAC de fecha 26 de enero de 2018, referente al incumplimiento de la exigencia establecida en el literal b), del artículo 7, de la Ley N° 30299 y del numeral 7.1 del artículo 7 del Reglamento de la Ley N° 30299, los cuales disponen como condición para la emisión de la respectiva Licencia de uso de arma de fuego bajo cualquier modalidad, que el solicitante no cuente con antecedente penal por delito doloso, es decir, no debe figurar en el registro nacional histórico de condenas del Poder Judicial por este tipo de delitos;

Que, no obstante lo señalado, cabe indicar que en aplicación del Principio de Razonabilidad, establecido en el numeral 1.4, artículo IV, Título Preliminar, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, la Autoridad Administrativa (en este caso, la SUCAMEC) cuenta con la obligación y la prerrogativa para que sus decisiones se adapten dentro de los límites de las facultades atribuidas siempre que mantenga la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos a tutelar; en este sentido, teniendo en cuenta que los hechos pasibles de sanción son irrefutables (registro histórico de sentencia condenatoria impuesta en su contra por el 25° Juzgado Penal de Lima de fecha 17 de noviembre de 2005), basta la verificación de este hecho para que se imponga las medidas administrativas que correspondan;

Que, ahora bien, en cuanto a la argumentación referida al control de los derechos y garantías constitucionales, conviene indicar, si bien es cierto, que la Constitución es la primera de las normas del ordenamiento jurídico peruano y define el sistema de fuentes formales, y que la Ley (en este particular, la Ley N° 30299, Ley de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, Productos Pirotécnicos y Materiales relacionados de Uso Civil) debe ser acorde con nuestra norma fundamental y sus principios, también es cierto, que una vez que la Ley se encuentra vigente, toda actuación decisoria de la Administración se encuentra inexorablemente sujeta a ella (en aplicación del principio de Legalidad), por lo que no puede dejarse de aplicar la Ley o pronunciarse en sentido contrario a ella (con tan solo interpretar que la misma es inconstitucional);

Que, asimismo, cabe precisar que el efecto jurídico posterior al cumplimiento de toda sentencia condenatoria, denominado como “rehabilitación”, por el cual se restituyen los derechos civiles del condenado, no exime a la SUCAMEC de no aplicar la condición establecida en el literal b), artículo 7, de la Ley N° 30299 y del numeral 7.1, artículo 7 del Reglamento de la Ley N° 30299, en las solicitudes de emisión y/o renovación de las Licencias de uso de arma de fuego bajo cualquier modalidad o en el control posterior de las Licencias de uso ya emitidas;

Que, con respecto a la presunta “interpretación auténtica” del inciso 13 del artículo 139 y del artículo 103 de la Constitución realizada por la SUCAMEC, es menester indicar que en el presente caso, la SUCAMEC no ha hecho ningún tipo de interpretación, ni aclaración, ni modificación de los textos constitucionales supuestamente interpretados, toda vez que los





Resolución de Superintendencia

interpretes especializados de la Constitución, son en definitiva, los jueces ordinarios (conforme dispone el artículo 138 de nuestra carta suprema) y el Tribunal Constitucional, quien es el supremo intérprete de la Constitución (según estipula el artículo 201 de la referida norma fundamental);

Que, en adición a ello, cabe señalar que la interpretación auténtica es una actividad que tiene lugar cuando el lenguaje en que se expresa el derecho (Constitución, Ley, Reglamento, etc.) es interpretado por los órganos encargados para su correspondiente interpretación o en su defecto es interpretada por el mismo órgano que se encargó de crear dicha norma jurídica a fin de determinar su alcance o sentido;

Que, la causa general de la invalidez del Acto Administrativo es que este sea contrario a derecho por acción propia de la Administración o por acción del administrado, debiendo encontrarse inmersa en alguna de las causales de nulidad. Aunado a ello, cabe indicar que el error no genera derechos, conforme prescribe el Tribunal Constitucional en el fundamento 5 de la Sentencia STC 1254-2004-PA/TC;

Que, al respecto, se observa que la Licencia de uso N° 7007584 y las Tarjetas de Propiedad de las armas de fuego con números de serie 18838116, E15439Y, A482787, SD4433, 4886561 y E6364543, en el extremo en que fueron emitidas, contravienen la normatividad reglamentaria de la materia y atentan contra el interés público, toda vez que vulneran normas de obligatorio cumplimiento por parte de los administrados, por lo que, se evidencia con este hecho, que la Licencia de uso N° 7007584 y las Tarjetas de Propiedad de las armas de fuego con números de serie 18838116, E15439Y, A482787, SD4433, 4886561 y E6364543, otorgadas en favor del señor Oscar Víctor Paliza Arellano, se encuentran incursas en causal de nulidad contemplada en los numerales 1 y 3 del artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444;

Que, en razón del principio de Privilegio de Controles Posteriores, se debe declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos materializados en la Licencia de uso N° 7007584 y en las Tarjetas de Propiedad de las armas de fuego con números de serie 18838116, E15439Y, A482787, SD4433, 4886561 y E6364543, previamente otorgada al señor Oscar Víctor Paliza Arellano, toda vez que en dichos actos se configuran las condiciones para declarar su nulidad, conforme establece el artículo 211 del referido texto legal, tales como: **1.** El acto administrativo en cuestión trasgrede directamente el ordenamiento jurídico, atentando contra el interés público; **2.** La nulidad de oficio debe ser declarada por el Superintendente Nacional, puesto que corresponde su declaración por el superior jerárquico del que expidió los actos administrativos a declarar nulos; y, **3.** La facultad para declarar la nulidad de oficio no ha prescrito, ya que el plazo exigido para declararla prescribe a los dos (2) años, a partir de su consentimiento;

Que, con respecto a la declaración de nulidad de oficio, debemos señalar que de acuerdo con el literal d), numeral 226.2, artículo 226 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, los actos administrativos que declaran la nulidad de oficio son actos que agotan la vía administrativa, es decir no corresponde su impugnación o cuestionamiento en sede administrativa;

Que, cabe acotar que la decisión de realizar un control posterior de los actos administrativos por parte de la SUCAMEC, en relación con el procedimiento administrativo para la obtención de la Licencia de uso N° 7007584 y de las Tarjetas de Propiedad de las armas de fuego con números de serie 18838116, E15439Y, A482787, SD4433, 4886561 y E6364543, es una decisión motivada y fundada en Derecho y sustentada por la evaluación de la



documentación presentada en el presente expediente administrativo, la misma que debe acreditar la conexión lógica entre los hechos con los supuestos señalados en el procedimiento para obtener Licencias de uso y Tarjetas de Propiedad de armas de fuego;

Que, a su vez, conviene indicar que en aplicación del Principio de Razonabilidad, establecido en el numeral 1.4, artículo IV, Título Preliminar, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, la SUCAMEC cuenta con la obligación y la prerrogativa para que sus decisiones se adapten dentro de los límites de las facultades atribuidas siempre que mantenga la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos a tutelar;

Que, en ese sentido, teniendo en cuenta que el hecho generador del incumplimiento advertido es irrefutable (toda vez que el señor Oscar Víctor Paliza Arellano registra antecedente penal histórico por delito doloso), basta la verificación del mismo para que se impongan las medidas administrativas que correspondan, tales como el depósito definitivo de las armas de fuego de propiedad del señor Oscar Víctor Paliza Arellano (en aplicación de los artículos 32 y 37 de la Ley N° 30299 en concordancia con el artículo 343 de su Reglamento), y su inscripción en el registro de inhabilitados para la obtención de licencias y autorizaciones reguladas por la Ley N° 30299 (conforme estipula el numeral 10.2 del artículo 10 de la Ley N° 30299);



Que, en consecuencia, la Oficina General de Asesoría Jurídica a través del Informe Legal N° 00261-2018-SUCAMEC-OGAJ de fecha 17 de abril de 2018, opina que corresponde al Superintendente Nacional declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos materializados en la Licencia de uso N° 7007584 y en las Tarjetas de Propiedad de las armas de fuego con números de serie 18838116, E15439Y, A482787, SD4433, 4886561 y E6364543, y, estando a lo establecido en el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, el precitado informe debe ser notificado conjuntamente con el presente acto administrativo;

Que, asimismo, en aplicación del numeral 11.3, artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, la presente declaración de nulidad de oficio debe disponer las acciones convenientes para hacer efectiva la responsabilidad del emisor o emisores del acto inválido, razón por la cual, debe remitirse el presente expediente administrativo a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Disciplinarios de la SUCAMEC;

Que, finalmente, cabe indicar que luego de materializada la declaración de nulidad de la Licencia de uso N° 7007584 y de las Tarjetas de Propiedad de las armas de fuego con números de serie 18838116, E15439Y, A482787, SD4433, 4886561 y E6364543, la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos debe realizar las acciones administrativas que correspondan de acuerdo a la naturaleza del presente caso, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 30299 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 010-2017-IN;

Con el visado del Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del Gerente General;

De conformidad con las facultades conferidas en el Decreto Legislativo N° 1127, Decreto Legislativo que crea la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, y el Decreto Supremo N° 004-2013-IN, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, modificado por Decreto Supremo N° 017-2013-IN;





Resolución de Superintendencia

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos materializados en la Licencia de uso N° 7007584 y en las Tarjetas de Propiedad de las armas de fuego con números de serie 18838116, E15439Y, A482787, SD4433, 4886561 y E6364543, por los fundamentos expuestos en la presente resolución, dándose por agotada la vía administrativa.

Artículo 2.- Disponer que la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos realice las acciones administrativas que correspondan de acuerdo a la naturaleza del caso, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 30299 y su Reglamento.

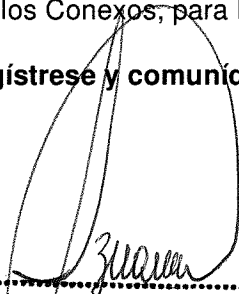
Artículo 3.- Disponer que la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos coordine con la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones a fin de que se efectivice la nulidad de la Licencia de uso N° 7007584 y de las Tarjetas de Propiedad de las armas de fuego con números de serie 18838116, E15439Y, A482787, SD4433, 4886561 y E6364543, en el Sistema de Armas.

Artículo 4.- Remitir copia certificada del presente expediente administrativo a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos de la SUCAMEC a fin de que investigue y efectúe la precalificación de los hechos expuestos en la presente Resolución.

Artículo 5.- Publicar la presente resolución en el Portal Institucional de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC (www.sucamec.gob.pe).

Artículo 6.- Notificar la presente resolución así como el Informe Legal N° 00261-2018-SUCAMEC-OGAJ, al señor Oscar Víctor Paliza Arellano y poner de conocimiento a la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos, para los fines correspondientes.

Regístrese y comuníquese.


.....
JUAN ALBERTO DULANTO ARIAS
Superintendente Nacional
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad,
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC



Y. B.º
E. Palza



Y. B.º
C. Verástegui

